

Santiago, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en su libelo el abogado Juan Manuel Álvarez Álvarez, en representación de Marcelo Enrique Toledo Cancino, ha deducido recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la ltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, que aprobó la sentencia en consulta dictada por el 9° Juzgado del Crimen de San Miguel, con declaración que en virtud de la adecuación de pena prevista en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, se condenó a su representado a la pena única de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de quince unidades tributarias mensuales, como autor de delitos reiterados de estafa, perpetrados desde 2003 a 2005.

Segundo: Que el fundamento del recurso, por el que se solicita la anulación de la sentencia definitiva de segunda instancia, es haber incurrido en la causal de casación en el fondo del N°1 del Artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que la sentencia, aunque calificando el delito con arreglo a la ley, la ha impuesto una pena más grave que la designada en primera instancia.

Lo anterior se habría producido debido al cuestionamiento de la sentencia en primera instancia por los supuestos errores en la determinación del grado de la pena aplicada y en la unificación de condenas, en la sentencia de segundo grado.

Su parte considera que no existe tal error, toda vez que el tribunal de primera instancia, al determinar el grado de pena que le corresponde al



sentenciado, sustenta su decisión sobre la base de la pena principal establecida en el artículo 467 N°1 del Código Penal, esto es la sanción de presidio menor en su grado medio a máximo.

Además, para poder concluir en la determinación de la pena, el tribunal la establece en base a dos reglas, por una parte, las que se refieren a las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, y en particular a lo que establece el artículo 67 inciso 2° del Código Penal que fija un mandato al sentenciador ante la concurrencia de atenuantes y/o agravantes, y en el caso de existir una atenuante, sin concurrir agravantes, la norma establece que ante tal escenario, se debe establecer el grado de pena desde el mínimo, es decir, desde la pena de presidio menor en su grado medio.

Por otra parte, para fijar definitivamente la pena, el tribunal se guía en base a la regla del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, en tanto a la reiteración de delitos que serán considerados como un solo delito, aumentándoles en uno, dos o tres grados la pena. Por consiguiente, el sentenciador de primera instancia aumenta en un grado la pena mencionada, que corresponde a la pena de presidio menor en su grado máximo.

Respecto al supuesto error en la aplicación de unificación de condenas, sobre la base de lo que establece el artículo 164 del Código de Procedimiento Penal, considera que tampoco existe tal error de aplicación, toda vez que, según el criterio fiscal, para poder unificar las condenas, deberían existir dos fallos ejecutoriados, afirmación que su parte considera más bien acomodaticia y no acorde a las reglas de interpretación de las normas penales que son de manera muy restrictiva y al momento de interpretar la norma penal, se debe considerar lo que establece el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales,



en tanto a la unificación de condenas, esta establece un mandato, al fijar en su inciso final, el deber del tribunal que dictare el otro fallo, de modificarlo de oficio o a petición del afectado.

Tercero: Que la sentencia de segunda instancia, en relación a lo pertinente de la alegación, refiere que el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal preceptúa, en su inciso primero, que, en los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie, se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno, dos o tres grados. Por su parte, el inciso segundo del mencionado artículo dispone que, si por la naturaleza de las diversas infracciones estas no pueden estimarse como un solo delito, el tribunal aplicará la pena señalada a aquella que considerada aisladamente, con las circunstancias del caso, tenga asignada pena mayor, aumentándola en uno, dos o tres grados según sea el número de los delitos.

Por consiguiente, habida cuenta que el delito de estafa que se imputa al encartado tiene asignada, en su modalidad más grave — regulada en el numeral 1° del artículo 467 del Código Penal— una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, si la defraudación excediera de cuarenta unidades tributarias mensuales, y considerando que concurre en la especie una circunstancia atenuante — la del numeral 6° del artículo 11 del estatuto punitivo— y ninguna agravante, por aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 68 del mencionado cuerpo legal sustantivo la pena que ha de asignarse a Toledo Cancino —y que ha de aumentarse en la forma que preceptúa el artículo 509 del estatuto penal adjetivo— es la de presidio menor en su grado medio, la que la Corte decide aumentar en dos grados, atendido el



número de ilícitos, esto es, hasta presidio mayor en su grado mínimo, fijándola en su *minimum*.

Cuarto: Que esta Corte comparte los fundamentos de la sentencia de segunda instancia, atendido que las normas fueron correctamente aplicadas por la Corte de Apelaciones, primero al establecer el delito base, atendido el monto de lo defraudado, esto es, la infracción al artículo 467 N°1 del Código Penal, que se sitúa en el rango del presidio menor en su grado medio a máximo; luego, al aplicar el artículo 68 del Código Penal, por tratarse de una pena que consta de dos grados y que frente a una circunstancia atenuante, obliga a imponer el *minimum* de la pena y finalmente el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, que le entrega la facultad al sentenciador de aumentar la pena por la reiteración de delitos, en uno, dos o tres grados. En este caso, el aumento se hizo en dos grados atendida la cantidad de estafas que fueron acreditadas respecto del sentenciado, 47 en el caso de la causa seguida ante el Juzgado del Crimen y 14 en el caso del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal.

Respecto de la alegación en torno a la unificación de penas, lo cierto es que la sentencia de segunda instancia la reconoce imponiendo una pena única por todos los hechos que fueron objeto del procedimiento que se siguió ante el Juzgado del Crimen así como aquellos que fueron conocidos en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal –contra el parecer de la Fiscal Judicial –, por lo que las alegaciones sobre el particular carecen de fundamento legal, en el entendido que la pena se impuso adecuadamente según lo ya razonado.

Quinto: Que así entonces, habiéndose efectuado por los jueces del fondo una correcta aplicación de la normativa atinente al caso en estudio y no



configurándose, en consecuencia, los errores de derecho pretendidos por la recurrente, el recurso será desestimado.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 546 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo, en contra de la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 68689-23.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por el Ministro Sr. Leopoldo Llanos S., los Ministros Suplentes Sr. Jorge Zepeda A., Sra. Eliana Quezada M., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G., y Sr. Ricardo Abuaud D. No firman los Abogados Integrantes Sra. Tavorari y Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos ausentes.



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

